

Santiago de Cali, mayo 25 del 2023

DOCTOR

PABLO JOSÉ CAICEDO GIL

**JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA**

E. S. D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.
PROCESO No. 76001-33-33-017-2022-00175-00.
DEMANDANTE: JUAN GUALÍ REMIGIO.
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA.

JOSÉ DAVID SÁNCHEZ CELADA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.465.601 expedida en Cali, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional de Abogado No. 133.751 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, de conformidad con el poder a mí conferido por la Doctora **MARÍA DEL PILAR CANO STERLING** en su condición de Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de la entidad, el cual acompaño al presente escrito junto con todos sus anexos, encontrándome dentro del término legal, me dirijo a Usted respetuosamente, con el objeto de presentar memorial de **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** respecto a la acción de reparación directa instaurada por el señor Juan Gualí Remigio, en los siguientes términos:

1. NOMBRE DEL DEMANDADO, SU DOMICILIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

El demandado es el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, quien en calidad de entidad territorial está exenta de demostrar su existencia al tenor de lo normado en el numeral 4° del artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, con plena capacidad legal para obrar en el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la misma ley, legalmente representado por el Doctor **JORGE IVAN OSPINA GOMEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en La Cumbre -Valle del Cauca, en su condición de Alcalde de este Distrito Especial. La representación judicial de la Entidad Territorial está a cargo de la Doctora **MARÍA DEL PILAR CANO STERLING**, mayor de edad y vecina de Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.869.025 expedida en Santiago de Cali –Valle del Cauca, Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Entidad, nombrada mediante decreto No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y acta de posesión No. 0007 del 1 de enero de 2020, debidamente facultada por el Doctor JORGE IVAN OSPINA GOMEZ en su condición de alcalde del Distrito Especial



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9
Teléfono: 6617084-85 www.cali.gov.co

y Representante Legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 "Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de Representación Judicial, Administrativa y Extrajudicial y se dictan otras disposiciones" con facultades para actuar en nombre y representación de la Entidad ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales; quien a su vez me sustituyó, mediante PODER ESPECIAL, para que represente judicialmente al Distrito Especial en este litigio en los términos del mandato a mi conferido.

Mi nombre es JOSÉ DAVID SÁNCHEZ CELADA, identificado con la cédula de ciudadanía N°14.465.601 expedida en Santiago de Cali y con Tarjeta Profesional de Abogado N°133.751 del Consejo Superior de la Judicatura y solicito conforme con lo anterior que se me reconozca personería jurídica para actuar a nombre del Municipio de Santiago de Cali.

Nuestro domicilio judicial está en la ciudad de Santiago de Cali. Nos pueden ubicar en el Centro Administrativo Municipal C.A.M., piso tercero y noveno de la Torre de la Alcaldía que queda en la Avenida 2N #10-70 de esta ciudad. Así mismo para efectos de notificación electrónica en la presente causa, el canal digital de la Entidad es el correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co.

2. OPORTUNIDAD

Mediante Auto Interlocutorio No. 397 de fecha octubre 28 del 2022, la demanda fue admitida por el Despacho Judicial.

Mediante comunicación electrónica del **11 de abril del 2023**, se surtió la notificación de la demanda a la entidad que represento, y conforme al auto mencionado se otorga un término de 30 días para contestar la demanda acorde a lo normado en los artículos 172, 199¹ y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dicho esto, se tiene que el término para contestar la demanda corrió a partir del día **14 de abril del 2023 y se extiende hasta el 29 de mayo del 2023**, no obstante que se presenta la contestación a la demanda el día de hoy 25 de mayo; es decir dentro del término para ello.

Teniendo en cuenta que la notificación se empezará a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje lo cual ocurrió el **11 de abril del 2023**, el término se empieza a contabilizarse a partir del **14 de abril del 2023** (viernes). Conforme a ello corrieron términos los días 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 del mes de abril; 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo del año 2023.

No corren términos los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 del mes de abril del 2023, 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21 y 22 de mayo del 2023 al ser días no hábiles.

¹ ARTÍCULO 199. NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO Y DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO A ENTIDADES PÚBLICAS, AL MINISTERIO PÚBLICO, A PERSONAS PRIVADAS QUE EJERZAN FUNCIONES PÚBLICAS Y A LOS PARTICULARES. (...) El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente."

3. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo totalmente a que se declare administrativamente responsable a mi representada y por ende me opongo a que se condene a cualquier título al distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali a que repare por las lesiones sufridas por el demandante por perjuicios materiales (lucro cesante) y perjuicios morales (daño moral y daño a la salud) a favor del demandante señor Juan Gualí Remigio.

Se demostrará de manera suficiente en este proceso, no existe material probatorio que permita estructurar una responsabilidad a cargo del Ente Público; así mismo se demostrara que las causas que originaron el daño que infiere haber sufrido el demandante no son consecuencia de la responsabilidad la Entidad Municipal y por lo tanto no esta obligada a indemnizar daño alguno, estableciendo desde ya que se configura la excepción de hecho de un tercero y de inexistencia de responsabilidad a cargo de la Entidad, por cuanto, la causa adecuada al resultado del presunto daño de la demandante, lo constituye un hecho atribuible a un tercero (conductor de otro vehículo), evento que rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y la falla para estructurar la responsabilidad Estatal; así mismo se probará que los hechos no se corresponden con el acervo probatorio arrojado al proceso que dan cuenta que los mismos ocurrieron de forma distinta a lo plasmado en el libelo.

En ese orden de ideas, estimo que existen razones suficientes para oponerme totalmente a todas las pretensiones contenidas en la demanda, por cuanto se encuentra demostrada la inexistencia de responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad territorial, lo que hace improcedente reclamar indemnización alguna, al no existir nexo causal el cual es un elemento estructurador de la mencionada responsabilidad, es decir, no existe causalidad adecuada entre el daño padecido por los demandantes.

Así mismo es de mencionar que no existe relación de causalidad directa inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Así mismo los fundamentos de derecho utilizados en la demanda, se corresponden a normas derogadas, esto es que se está invocando el preámbulo de la Constitución Política de 1886, normas del Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984 y el Decreto Municipal 0203 de 2001 (Estructura Orgánica y Funcional del Municipio de Santiago de Cali). Par terminar se sustenta de forma compleja que la omisión que promueve la presente demanda estriba en una ausencia de mantenimiento vial y de señales de tránsito, lo cual como se demostrará no se corresponde con la realidad.

4. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

- 1. AL HECHO PRIMERO: NO ES CIERTO.** De forma compleja se plantean varias situaciones que procedo a detallar así. Se afirma que los hechos ocurrieron el 17 de noviembre del año 2020, cuando el “querellante” conducía prudentemente y con los dispositivos reglamentarios el velocípedo de placa DUL28F, Marca Bajaj; lo cual resulta ser una afirmación sin sustento alguno y que conforme al material probatorio aportado por el mismo libelista, se torna contradictorio como más adelante lo sustentaré, no obstante que desde ya se establece que no existe prueba de tal afirmación. En lo que corresponde a que los hechos se presentaron en la calle 121 Bis con Carrera 28D en el barrio Pizamos III, a eso de las 5:30 pm “volteado en el romboy” (sic), “cuando los vehículos implicados cayeron dentro de una vía con falta de visibilidad”; **nótese que se está mencionando que existe otro vehículo**, del cual no se aportan mayores datos, con todo no es verosímil lo afirmado. De forma compleja se infiere que existían unos árboles y baches o huecos que afectaban la visibilidad lo cual no está probado. Posteriormente se plantea: “Señor Querellante –Afectado-Víctima” colisionó con otro vehículo tipo Jeep, lo cual genera que demandante salga despedido y choque estrepitosamente contra otro Jeep y contra el pavimento; nótese como desde el primer hecho se establece claramente que **los hechos que promueven la presente acción se corresponden con una colisión entre vehículos particulares, en donde nada tiene que ver el Distrito Especial de Santiago de Cali**. Como consecuencia del siniestro el señor Juan Gualí Remigio sufrió múltiples traumatismos y fue remitido en ambulancia a la Clínica Cristo Rey; debido a la gravedad del hecho debieron realizarle varias cirugías y de ello se aporeta la historia clínica parcial del caso. Sin sustento probatorio alguno se afirma que en el sitio no existían señales que previnieran sobre la falta de visibilidad por la espesura de los árboles y baches o huecos en la vía; lo cual no tiene ningún sustento probatorio y como más adelante explicaré el sitio no se corresponde con las indicaciones expuestas en el libelo. Se plantea una omisión a los deberes contenidos en el Decreto Extraordinario No. 0203 del año 2001 norma que esta derogada desde el año 2016 con la expedición del Decreto Extraordinario No. 0516 del 2016; razones por demás que no le asiste razón en lo planteado en el presente hecho, y en ese sentido no puede considerarse parte del hecho al ser una norma que esta fuera del ordenamiento jurídico y que ni siquiera estaba vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, adicionalmente se incorporan imágenes de otro profesional del derecho en otra causa disímil a la que nos atañe.
- 2. AL HECHO SEGUNDO: PARCIALMENTE CIERTO Y NO ES UN HECHO.** Se realiza la transcripción de parte de la atención recibida en la Clínica Cristo Rey y del contenido del Informe Pericial de Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica Cali-Valle, donde mezclan acontecimientos y se plantea en primera y en tercera persona el hecho. Con todo, lo transcrito se corresponde a un medio probatorio que se aportó de forma fraccionada y del cual no se aprecia una solicitud probatoria a efectos que las Entidades correspondientes alleguen ese insumo de forma digital e íntegra al Despacho; en esa dirección lo planteado en el presente acápite no se trata de un hecho si no de un **medio probatorio** que se aportó parcialmente.



- 3. AL HECHO TERCERO: PARCIALMENTE CIERTO Y NO ES UN HECHO.** Es similar al acápite anterior, no obstante que se infiere la realización de una cirugía y de una atención por Urgencias al demandante, donde se transcribe de forma parcial la historia clínica; de tal suerte que lo transcrito se corresponde a un **medio probatorio** y no deberá ser tenido en cuenta como un hecho.
- 4. AL HECHO CUARTO: PARCIALMENTE CIERTO Y NO ES UN HECHO.** Se menciona un tiempo de hospitalización del demandante y similar a los anteriores acápites se transcribe de forma parcial la historia clínica; de tal suerte que transcrito se corresponde a un **medio probatorio** y no deberá ser tenido en cuenta como un hecho.
- 5. AL HECHO QUINTO: NO ME CONSTA.** En el hecho se menciona que el demandante se encuentra incapacitado desde la fecha del accidente incluso hasta la fecha de la presentación de la demanda, en razón que en la historia clínica se plantea una **incapacidad funcional** atendidas las secuelas del accidente que demandan terapias. Dicho esto al parecer se están confundiendo las definiciones de lo que se corresponde a una incapacidad con una pérdida de capacidad laboral. En ese sentido es necesario hacer referencia al Decreto No. 1427 del 29 de julio del 2022, proferido por el Ministerio de salud y Protección Social, donde en su artículo 2.2.3.1.3. define en el numeral 6 lo que se entiende como **incapacidad** de origen común. Así: *“Es el estado de inhabilidad física o mental que le impide a una persona desarrollar su capacidad laboral por un tiempo determinado, originado por una enfermedad general o accidente común y que no ha sido calificada como enfermedad de origen laboral o accidente de trabajo.”* Lo cual debe hilarse con lo contenido en el artículo 2.2.3.3.2 que establece los requisitos mínimos de un certificado de incapacidad que no podrá ser superior a 30 días prorrogables cada uno. De otro lado El Decreto 1507 del 2014 que contiene el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, establece que la **Invalidez** “Es la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al cincuenta por ciento (50%)” De tal suerte que lo indicado en el hecho no se corresponde con la descripción legal; o de otro lado no podría ser considerado como un hecho habida cuenta que **no existe un dictamen proveniente de la Junta Regional de Invalidez** que permita establecer la afectación de la capacidad laboral del demandante.
- 6. AL HECHO SEXTO: PARCIALMENTE CIERTO.** Se plantean varias afirmaciones sin respaldo probatorio como tal, ni tienen relevancia en los hechos materia de la presente demanda y que detallo a continuación. Sobre la inexistencia de un Informe Policial de Accidente de Tránsito, es cierto, no se allegó ninguno que dé certeza de la forma en que ocurrieron los hechos, que por demás **conforme a las declaraciones juramentadas del propio demandante y del otro automotor involucrado en el presente asunto, se corresponde con un accidente entre dos particulares** en donde nada tiene que ver la Administración, ni es posible identificar un presunto hueco en la vía, ni la espesura de los árboles; al respecto me permito aportar el enlace² de la ubicación del sitio de la plataforma Google Maps donde se aprecia una imagen del

² <https://www.google.com/maps/@3.4099754,-76.4731787,3a,75y,200.35h,66.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAw6BYwlahkSSha51KcsCqw!2e0!7i13312!8i6656>

mes de julio del año 2019 donde se puede observar que contrario a lo expuesto en los hechos, el paraje cuenta con señales de tránsito (pare y peatones en la vía), también se observa que es una vía sin huecos y sin árboles que afecten la visibilidad:



Se reitera que contrario a lo expuesto en los hechos, **la vía no presenta huecos** y como se puede colegir de las declaraciones extrajudicio aportadas por el demandante, los hechos se corresponden a que **Wilson Alberto Ríos, conductor del campero placas HJE513 no respetó la señal de pare y atropelló al demandante**. De tal suerte que las afirmaciones realizadas en la demanda no se corresponden a la realidad y no es cierto que exista un riesgo inminente en la vía. En lo relativo a los titulares de prensa que no se aportaron con el traslado, los mismos datan de los años 2009, 2011 y 2012, muy distantes a la de la ocurrencia de los hechos que como se indica en la demanda fue en el mes de noviembre del año 2020 donde todavía existían medidas restrictivas para la circulación con ocasión a la pandemia por Covid-19, es decir que la cantidad de personas circulando era menor a las actuales y de contera se insiste en que lo ocurrido se corresponde a un conflicto entre particulares.

- 7. AL HECHO SÉPTIMO: NO ME CONSTA.** Se indica una afectación del demandante para el desarrollo de actividades esenciales y placenteras de su vida diaria, tales como actividades laborales, recreativas, culturales, y deportivas; de las cuales no se indicaron de que manera; y de las tres últimas no se portaron pruebas que indiquen de qué forma se están afectando, ni es posible deducirlo de los hechos; en igual situación se plantea un estado de aflicción, desesperanza y depresión tanto para el actor como para su grupo familiar; por lo no es posible determinar el grado de congoja aducida y que como se explicó en el hecho anterior, el presente asunto se corresponde a un conflicto entre particulares.

- 8. AL HECHO OCTAVO: NO ME CONSTA – PARCIALMENTE CIERTO.** Se afirma la existencia de un proceso penal que cursa ante la Fiscalía 29 Local y que paralelamente se evacuó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 57 Judicial para Asuntos Administrativos, como requisito de procedibilidad. Sobre la existencia de la investigación penal **no existe un acervo probatorio que permita establecer la existencia de una causa penal y de ser así se configuraría un pleito pendiente** atendido a que con las resultas de aquella investigación se podría establecer quien fue el responsable de los daños reclamados y que como ya se dijo, se corresponde a un hecho entre particulares donde no tuvo injerencia la Entidad Pública que represento. En lo que atañe al agotamiento del requisito de procedibilidad, dicha situación es veraz y de ello se aportó la certificación de la Procuraduría.
- 9. AL HECHO NOVENO: ES CIERTO.** Corolario del hecho anterior, la etapa de conciliación previa, se surtió en el Despacho de la Procuraduría 57 Judicial para Asuntos Administrativos de ésta ciudad de Santiago de Cali.
- 10. AL HECHO DECIMO. NO ME CONSTA.** Existe un memorial poder dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca – Presidente – Magistrado – Ponente – del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Así mismo en dicho memorial se establece que los demandados son: **1)** la Alcaldía de Santiago de Cali. **2)** Representante Legal DAGMA Cali-Valle. **3)** Representante Legal de la Secretaría de Obras Públicas Cali-Valle o Infraestructura Vial. Y **4)** La Gobernación del Valle del Cauca representada por Clara Luz Roldán González. Conforme lo anterior, el poder esta dirigido a una especialidad distinta que es el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca y sumado a ello, se esta convocando a Organismos que no cuentan con representación jurídica como lo son el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente) y en otro caso a una dependencia que no existe como lo es la Secretaría de Obras Públicas o Infraestructura vial; y finalmente se indica como sujeto pasivo a la Gobernación del Valle del Cauca; Con todo desde esta defensa se considera que el memorial poder no satisface los parámetros que debe contener el derecho de postulación contemplado en el artículo 74 del Código General del Proceso, que exige de la representación judicial para uno o varios procesos el estar determinados e identificados claramente.

5. EXCEPCIONES

INEPTUD DE LA DEMANDA Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Designación de las Partes.

Conforme se establece en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se promueve una demanda, debe dirigirse a quien sea competente, en éste caso por la naturaleza del medio de control, el valor indicado en la estimación razonada de la cuantía, la competencia le corresponde específicamente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cali - Valle del Cauca - Reparto, y el libelo como el poder fue dirigido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es decir que no se dirigió al competente.

En esa dirección el artículo 162 ibidem, establece como requisito formal en el numeral primero la designación de las partes y de sus representantes; revisado el texto de la demanda la misma carece de dicho requisito al ser dirigida contra la Alcaldía de Santiago de Cali (hoy Distrito Especial) el Representante Legal DAGMA Cali-Valle; el Representante Legal de la Secretaría de Obras Públicas Cali-Valle o Infraestructura Vial; y la Gobernación del Valle del Cauca representada por Clara Luz Roldán González.

Dicho esto, el poder esta dirigido a una especialidad distinta que es el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca y sumado a ello, se esta convocando a Organismos que no cuentan con representación jurídica como lo son el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente) y en otro caso dependencia que no existen como lo es la Secretaría de Obras Públicas o Infraestructura vial; y finalmente se indica como sujeto pasivo a la Gobernación del Valle del Cauca.

Es válido precisar que la Entidad que represento, desde el año 2018 y conforme a la Ley 1933 del 1 de agosto de 2018 le corresponde la denominación del Distrito especial - Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali; en ese orden de ideas se recaba la ineptitud de la demanda al no estar plenamente designada la parte demandada según lo normado en el CPACA.

Dicha situación es reiterada en la diligencia de conciliación prejudicial, la cual constituye un requisito de procedibilidad para el medio de control, en ese trámite se cito a las al Municipio de Santiago de Cali, conforme a la constancia del 22 de junio del 2022, en ese sentido quien fue convocado a la etapa prejudicial fue el Municipio de Santiago de Cali y no el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, lo cual podría considerarse como una ausencia al requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Indebida Determinación de las Pretensiones y de la Cuantía

Profundizando en los requisitos formales para la presentación de la demanda, la norma es clara en que se debe determinar con precisión lo que se pretenda, revisado el traslado se observa que se están solicitando perjuicios por daño material sin que se justifique los valores con los cuales se sustente los ingresos mensuales del demandante y en lo que atañe a los perjuicios morales se solicitan los topes máximos fijados en la sentencia de unificación del Consejo de Estado³, sin tener en cuenta que se trata de lesiones donde para poder cuantificar su afectación es necesario contar con el dictamen de la Junta Regional de Invalidez, con lo cual se podría establecer que los valores pretendidos deben ser inferiores a los reclamados.

Así mismo se observa que los perjuicios por daño a la salud superan los topes de la sentencia en comento y en gracia de discusión tampoco se justificó la consolidación para reclamar esta tipología de daño superando los topes, conforme al tenor literal de la sentencia de unificación.

De contera, al no contar con una debida y estructurada determinación de lo que se promueve con la demanda, se configura una ineptitud de la misma.

³ Sección Tercera del Consejo de Estado. Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep/2013, con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO

A título de excepción considero que en el presente asunto es aplicable la inexistencia de responsabilidad o falla del servicio, sustentada en el hecho de que la parte demandante no demuestra una relación de causa – efecto, teniendo en cuenta que el daño ocasionado no fue producto de una acción de la Entidad Territorial, pues el accidente tiene su causa eficiente en la falta de pericia del conductor del otro vehículo tipo campero o Jeep de placas HJE513 involucrado en el hecho, conducido por el señor Wilson Alberto Ríos, quien no respetó la señal de pare y atropelló al demandante.

Por ello el presente caso deberá estudiarse bajo el régimen de falla probada, en el cual a la parte demandante le corresponde demostrar que convergen todos los elementos que materializan la responsabilidad estatal; además como se reprocha una omisión administrativa, se deberá probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual se deriva, así como acreditar la existencia de la falla del servicio y demostrar que dicha falla fue la única causante del daño.

Para el caso de marras, considero que no se presenta la falla del servicio, puesto que en el presente asunto los hechos plasmados en la demanda no se corresponden con la realidad y en gracia de discusión los mismos surgen con ocasión a un conflicto entre particulares en donde en nada intervino la Administración Distrital y ahora vía reparación directa se pretende responsabilizar con hechos que no están soportados probatoriamente.

Y es que de las declaraciones bajo juramento rendidas ante el Despacho Veinte del Círculo de Cali, en fecha del primero y del tres de diciembre del 2021, por el propio demandante y del señor Wilson Alberto Ríos, queda claro que el siniestro que promueve la presente demanda, atañe a la colisión de los dos conductores cunado en el lugar de los hechos el conductor del Jeep no acató la señal de pare y atropelló al demandante que se movilizaba en una motocicleta.

Conforme lo anterior, la demanda carece de pruebas respecto de las circunstancias atribuibles a una falla en el servicio; no existe material probatorio que permita establecer la presunta falla que invoca la parte actora, máxime cuando los propios involucrados deponen bajo juramento que los hechos ocurrieron de otra forma a lo planteado en el texto del libelo.

El artículo 90 de la Constitución Política, establece que “Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” al respecto las altas Cortes han precisado que el daño antijurídico hace referencia a la lesión de un bien legítimo tutelado, que la víctima no esta en obligación de soportar.

De la definición del daño puede colegirse que no todos los daños son indemnizables; que el daño antijurídico es aquel que causa un perjuicio cierto el cual la persona no está en obligación de soportar; de lo cual se infiere que existen daños que no son objeto de protección jurídica habida cuenta que se trata de un conflicto entre particulares.

Considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista Juan Carlos Henao, en su libro “El Daño” Universidad Externado de Colombia, primera edición Julio de 11 de 1998. Página 38, cuando afirma:

“(…) sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad, esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad, en efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.

Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.

Lo anterior es aplicable al presente caso, en el entendido que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, sin embargo la sola presencia de éste no exige una indemnización por parte del Ente Territorial.

Sobre la inexistencia de la falla en el servicio, se recaba en la ausencia de elementos que respalden la ocurrencia de los hechos expuestos en la demanda, por cuanto no existe Informe Policial de Accidente de Tránsito, ni ningún otro elemento de prueba salvo lo consignado en la historia clínica que proviene de la versión de la misma demandante y como se plasma en la contestación a los hechos los mismos ocurrieron de otra forma donde no es posible exigir una falla en el servicio.

INSUFICIENCIA DE MATERIAL PROBATORIO.

Se fundamenta esta defensa en abstracto, consistente en todo hecho o acto exceptivo que se logre probar a lo largo de la actuación procesal y que resulte favorable al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Para ello es importante precisar que no esta probado en el plenario la existencia de un foramen o de una ausencia de mantenimiento de las zonas verdes, lo cual no es posible evidenciar ni con las fotos aportadas con la demanda que incumplen los presupuestos para ser consideradas un medio probatorio, ni con las que se pueden consultar en el portal de Google maps⁴ que tiene una línea de tiempo desde el año 2013.

6. RELACIÓN DE LAS PRUEBAS

1. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito a su señoría, la fijación de fecha y hora para que el señor Juan Gualí Remigio, de condiciones civiles conocidas en el proceso, absuelva el interrogatorio de parte que de manera verbal o en sobre cerrado les formularé, en relación con los hechos materia de este proceso.

⁴ <https://www.google.com/maps/@3.4099754,-76.4731787,3a,75y,200.35h,66.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAw6BYwlahkSSha51KcsCqw!2e0!7i13312!8i6656>

2. **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

En cuaderno separado presento el llamamiento en garantía a la Compañías aseguradoras:

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	CORREO ELECTRÓNICO
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa Nit. 860.524.654-6	Juan Carlos Lenis Cobo o Quien haga sus veces	notificaciones@solidaria.com.co
Chubb Seguros de Colombia S.A. Nit. 860.026.518-6	Manuel Francisco Obregón Trillos o Quien haga sus veces	notificacioneslegales.co@chubb.com
SBS Seguros Colombia S.A. Nit. 860.037.707-9	Luis Carlos González Moreno o Quien haga sus veces	notificaciones.sbseguros@sbseguros.co
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Nit. 860002184-6	Alexandra Quiroga Velásquez o Quien haga sus veces	notificacionesjudiciales@axacolpatria.co
HDI Seguros S.A. Nit. 860.004.875-6	Juan Rodrigo Ospina Londoño o Quien haga sus veces	presidencia@hdi.com.co

Para la **Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa**, identificada con Nit. 860.524.654-6, representada por su Administrador regional, doctor JUAN CARLOS LENIS COBO o quien haga sus veces, solicito su vinculación como aseguradora líder, con fundamento en lo normado en el Artículo 90 de la Constitución Nacional, artículos 140 y 225 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Artículos 64, 65 66 de la Ley 1564 de 2012, Código General del proceso.

El llamamiento en garantía se realiza con sustento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 420-80-994000000181, vigente desde el 23 de junio del 2020 hasta el 19 de mayo del 2021 y en el evento de existir una condena para la Entidad Distrital, sea la Entidad llamada en garantía la que cubra los emolumentos conforme a la póliza referida.

7. **ANEXOS**

El poder a mí conferido y sus anexos.
Los documentos relacionados como Anexos.

8. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURIDICA DE LA DEFENSA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte convocante, por cuanto no existe relación de causalidad directa inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Con respecto a la Responsabilidad Administrativa del Estado por daños causados a particulares, la Jurisprudencia tradicionalmente adopta y exige la presencia de tres (3) elementos esenciales, 1) Un daño causado a un bien jurídicamente tutelado, 2) Una falla del servicio por acción u omisión, retardo o irregularidad en su prestación y 3) El nexo causal entre uno y otro extremo, es decir una relación de causalidad entre la falla o falta de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.

La esencialidad de los tres (3) anteriores elementos llega al extremo, que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa.

En nuestro sistema Judicial le corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad entre la falla de la administración y el daño.

En ese orden, el Ente Territorial, podrá exonerarse o exculparse alegando el hecho exclusivo de la víctima o **el hecho exclusivo y determinante de un tercero**.

En el juzgamiento de daños inferidos por el mal funcionamiento del servicio, se exige de ciertas puntualizaciones, pues no es viable predicar que para obtener la indemnización por parte del Estado, siempre le baste al reclamante comprobar la omisión del servicio, su retardo o la prestación deficiente, situaciones que no se encuentran acreditadas en la presente causa.

En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho:

"La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en cuanto a **que el anteriormente citado artículo 90 de la Constitución Política no consagró una responsabilidad absolutamente objetiva** y que, por el contrario, aún con base en dicha disposición la falla del servicio sigue siendo el régimen general de responsabilidad estatal, al lado del cual se reconoce la existencia de regímenes objetivos, permite indicar que bajo el fundamento del rompimiento de igualdad ante las cargas públicas no pueden indemnizarse todos los daños que sufren los particulares.⁵" **(Negritas fuera del texto)**

Los hechos objeto de la presente acción, deberán de manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o falla probada, en donde le corresponde a la demandante la demostración de los elementos que configuran la responsabilidad; entendiendo que si bien existe un daño, no se evidencia el nexo causal que une el mismo con la falla del servicio reclamada al Ente Territorial.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: CARLOS BETANCURJARAMILLO, exp. 11300, 22 de octubre de 1997.

DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS – ACTIVIDAD PELIGROSA

El artículo 2 de la Ley 769 de 2002, establece que la Licencia de Conducción es un documento público de carácter personal que autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez dentro del territorio nacional.

Para el otorgamiento de la licencia de conducción, el legislador ha establecido unos requisitos, contemplados en los artículos 17 y 19 ibidem, encaminados a tener una certeza de que quienes estén al mando de cualquier tipo de vehículo, sean personas capacitadas para ello, en el entendido que están en el **ejercicio de una actividad considerada Peligrosa**, en donde están expuestos bienes jurídicamente tutelados, como lo son la vida e integridad de las personas y la protección en general de la ciudadanía expuesta al riesgo no solo de quienes estén al mando de vehículos, si no de quienes hacen parte del tránsito como los peatones y otros vehículos.

En el caso de las motocicletas es sabido que presentan una alta inestabilidad y es por ello que quienes las conducen deben aplicar especial cuidado en la visualización del entorno por donde se desplazan, asumiendo el riesgo que implica la conducción de dichos vehículos que no poseen ningún sistema de seguridad para la integridad de la persona distinta a la propia pericia y capacidad de maniobrar, con el agravante que puede acarrear el conducir sin aplicar lo dispuesto en la norma para ello.

De conformidad con el Código Nacional de Tránsito y por razones de seguridad vial, el propietario o tenedor de un vehículo que transite por el territorio nacional tiene la obligación de mantenerlo en **óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad** (art. 50). También se establece que todos los vehículos automotores, deben someterse a **revisión técnico-mecánica**, la cual estará destinada a verificar el buen funcionamiento del sistema mecánico, sistema eléctrico y del conjunto óptico, la eficiencia del sistema de combustión interno, los elementos de seguridad, el buen estado del sistema de frenos y las llantas del vehículo. (Art. 51) todo ello a efectos de garantizar que los vehículos hacen parte del tránsito, conserven las condiciones de funcionalidad y seguridad en la vía.

Por su parte el artículo 55 del Código en mención establece el **Comportamiento del conductor**, quien debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, debiendo **transitar por la derecha de la vía** a una distancia no mayor de un (1) metro de la acera (art. 94), con las luces delanteras y traseras encendidas y portando el casco (art. 96) y en todos los casos, **el conductor deberá atender al estado del suelo**, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de éste (Art.108).

La sana lógica nos deja pensar que alguno de los conductores involucrados en el presente asunto, esto es el propio demandante Juan Gualí Remigio (motociclista) y el señor Wilson Alberto Ríos, (conductor del campero placas HJE513); no tuvieron suficiente cuidado y precaución al transitar por la vía que como se indica con su propia versión es una intersección previa a una rotonda o glorieta, donde se debe transitar a baja velocidad; y si hubieren observado las normas de conducción, esto es velocidad adecuada, respetando los carriles, los hechos no se hubieren presentado, recordando que se dice que se trata de una vía recta, plana, con buena iluminación, en condiciones climáticas normales y visibilidad normal.

Reparando en jurisprudencia hago referencia a lo establecido por el Consejo de Estado así:

*(...) "Debe recordarse que los usuarios de las vías, bien como peatones o como conductores, están en la obligación de extremar al máximo las medidas de seguridad, independientemente de que una norma les imponga dicha exigencia, pues **la conducción de vehículos automotores es considerada una actividad peligrosa**, lo cual implica asumir riesgos cuando se hace partícipe de ella, **pero dicha obligación tiene la connotación de ser mucho más exigente para los motociclistas**, por su estado total de indefensión, a tal punto que en los eventos en los que estos resultan involucrados en un accidente, siempre llevan la peor parte."*⁶ (Negritas fuera del texto).

DE LA IMPROCEDENCIA DE REPARACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD ESTATAL

El artículo 90 de la Constitución Política, establece que "Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas" al respecto las altas Cortes han precisado que el daño antijurídico hace referencia a la lesión de un bien legítimo tutelado, que la víctima no esta en obligación de soportar.

De la definición del daño puede tenemos que el antijurídico es aquel que causa un perjuicio cierto el cual la persona no está en obligación de soportar; de otro lado se tiene que en esa definición el Estado no esta en la obligación de indemnizar los daños que no sean objeto de protección jurídica por acción u omisión.

En ese orden existe una causal de exoneración de responsabilidad para el Estado que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de un tercero, lo cual ocurre en el presente asunto que como se ha insistido se trata de una colisión entre dos vehículos particulares, donde se tiene una declaración juramentada del propio **Wilson Alberto Ríos**, conductor del campero placas HJE513 que **cuenta que lo sucedido ocurrió por la omisión propia de no respetar la señal de pare que existe en el lugar.**

Dicho esto, es relevante hacer mención a lo normado en el Código Nacional de Tránsito (ley 769 de 2002), donde se establece que en todos los casos el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo, respetar los límites de velocidad en zonas escolares, entre otras, precisando que el supuesto daño es atribuible a la imprudencia del referido Wilson Alberto Ríos.

Sobre este particular considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista Juan Carlos Henao, en su libro "El Daño" Universidad Externado de Colombia, primera edición Julio de 11 de 1998. Página 38, cuando afirma:

⁶ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA 17.185 (R-2237), Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto d dos mil nueve (2009). (Negritas fuera del texto).

“(…) sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad, esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad, en efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.

Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.

Lo anterior es aplicable al presente caso, en el entendido que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, sin embargo la sola presencia de éste no exige una indemnización por parte del Ente Territorial.

En esa dirección es preciso recabar que del material probatorio aportado, no es posible edificar una responsabilidad en cabeza de la Entidad Territorial y como se ha insistido los hechos que se presentan en la demanda no ocurrieron de esa forma, habida cuenta que se trata de una colisión entre dos vehículos particulares donde no es posible reclamar una falla en el servicio.

DEL SUSTENTO PROBATORIO APORTADO EN FOTOGRAFÍAS

El material probatorio debe cumplir con unos requisitos indispensables para revestir de valor probatorio, ese orden la prueba deber ser eficaz y útil para conducir al operador judicial a proferir un fallo o sentencia.

Analizando el material de fotografías aportado con el traslado de la demanda, con las cuales se pretende acreditar el estado de la vía, y las lesiones sufridas por el demandante, resulta inconducente dicho medio probatorio en el entendido que para la demostración de este hecho se requiere de un conocimiento técnico, conforme lo establece el artículo 233 del CPC, que a su tenor dispone:

“La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.”

La experticia técnica, podría determinar las medidas de la vía, las distancias mínimas o máximas, la trayectoria de los vehículos, una descripción general y particular del lugar donde se indica ocurrieron los hechos, la reglamentación aplicable para éste tipo de vías la delimitación, la presencia señales de tránsito, etc. Condiciones que no se reflejan con el material aportado en la demanda.

Es por ello que el material fotográfico resulta impertinente, en cuanto que no es posible establecer la relación entre el medio probatorio y el hecho que se pretende probar, es decir, no existe forma de establecer la época de estas imágenes, o si correspondan al lugar del accidente.

En relación con el tema se ha pronunciado el Consejo de Estado, indicando que:

“Sobre las fotografías cabe decir, como lo ha explicado la Sala en otras oportunidades (1) , que son en este caso documentos privados representativos, por no acreditarse que las tomó un funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC, art. 251). La doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de este tipo de documento representativo; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc, sirve para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en la fotografía a la persona de la cual habla o el lugar o la cosa que dice haber conocido (2) . Si bien para cuando se aportaron esas fotografías regía el artículo 25 del Decreto-Ley 2.651 de 1991, **lo cierto es que por si sola la presunción de autenticidad de las fotografías no permite definir la situación temporal de ocurrencia del suceso, que representan**, pues la ley procesal civil enseña, en el artículo 280, que la fecha cierta de los documentos privados solo se deduce respecto de terceros “desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia” (negrilla por fuera del texto original). En consecuencia las fotografías privadas, allegadas con la demanda, no se tendrán en cuenta, a pesar de que en la demanda se aduzca que corresponden al sitio en el que pareció ahogado el menor, debido a que la fecha cierta, por ser documento privado, se entiende solo a partir de una de las situaciones que fija la ley, ya trascritas, y, además, porque ninguna de las personas que declararon en el proceso contencioso administrativo las reconoció, por no haberseles puesto de presentes al momento de rendir su testimonio, y tampoco a través de inspección judicial se estableció que ellas sí corresponden al río Pepé” (Subraya fuera del texto) (Sentencia de 28 de julio de 2005. Expediente 14.998. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo)

Igual postura asumió la Alta Corporación en Sentencia 1996-03099 de junio 8 de 2011 al señalar lo siguiente:

“Previo al análisis del fondo de la controversia, es menester advertir que la parte actora, con el fin de acreditar los hechos, aportó al proceso unas fotografías (fls. 91 a 96, cdno. 1), las cuales no serán valorados en esta instancia, toda vez que carecen de mérito probatorio, en la medida en que si bien fueron expuestas a algunos testigos (fls. 78 a 82, cdno. 3), estos resaltan en sus declaraciones que las imágenes corresponden a la calle en la cual se presentó el accidente, sin embargo **desconocen la época en que fueron tomadas o documentadas, de modo que no es posible definir con ellas la situación temporal de ocurrencia del suceso que representan (...)**” Negrillas fuera del texto.

En ese orden me permito indicar al Despacho, que desde éste extremo procesal, se considera que las fotografías aportadas al proceso carecen de sustento probatorio al no poder establecer cuando fueron realizadas ni tener certeza de su ubicación.

DE LA INDEBIDA DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS INMATERIALES

El órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha fijado unos topes a indemnizar⁷ tratándose de daños inmateriales por lesiones, los cuales para el caso concreto serían aplicables los de la siguiente tabla:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Para aplicar los valores descritos en la tabla anterior, es indispensable verificar la gravedad de la lesión sufrida por la víctima, en éste caso la demandante Juan Gualí Remigio, lo cual permitiría tasar un valor en salarios mínimos, para él quien es el único reclamante de daño, situación que no puede realizarse por cuanto no existe un dictamen de la Junta Regional de Invalides en firme.

Profundizando en el tema, no existe una justificación que permita establecer cómo se pretende una indemnización por éste concepto al no disponer de un dictamen en firme y de otro lado no existe una explicación para solicitar una reparación por encima de dichos parámetros.

Respecto a la reclamación por daño a la salud, no se encuentra en los anexos aportados la sustentación de dicha reclamación relativos a poder determinar de qué forma se ha afectado una alteración del comportamiento o desempeño del demandante en su entorno social según las variables de la sentencia de unificación en comento; además como ocurre con la determinación del daño moral, se están reclamando sumas por encima del tope, cuando la tabla para éste perjuicio contempla valores diferentes.

DE LA INDEBIDA DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES

En la demanda se solicita una pretensión para la reclamación de perjuicios materiales de lucro cesante, sin embargo sólo se especifica la modalidad de consolidado donde se limita a indicar un valor.

⁷ Sección Tercera del Consejo de Estado. Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep/2013, con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

Sumado a ello es de indicar que tal pretensión no se corresponde con la certificación aportada de la empresa Construcciones Civiles AM del 15 de diciembre del 2020 que acredita que los ingresos del demandante son distintos a los tenidos en cuenta en la demanda y que utilizaron para proyectar la reclamación del lucro cesante por lo tanto se configura la indebida determinación de los perjuicios reclamados.

DE LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD

La parte convocante no demuestra una relación de causa – efecto, teniendo en cuenta que **el daño ocasionado no fue producto de una acción del Municipio de Cali, pues el accidente tiene su causa eficiente en la falta de prudencia del conductor del vehículo Wilson Alberto Ríos**, quien con su vehículo campero placas HJE513 no respetó la señal de pare y atropelló al demandante.

Por ello el presente caso deberá estudiarse bajo el régimen de falla probada, en el cual a la parte demandante le corresponde demostrar que convergen todos los elementos que materializan la responsabilidad estatal; además como se reprocha una omisión administrativa, se deberá probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual se deriva, así como acreditar la existencia de la falla del servicio y demostrar que dicha falla fue la única causante del daño.

Para el caso de marras, considero que no se presenta la falla del servicio, puesto que los señores Juan Gualí Remigio (demandante - motociclista) y el señor Wilson Alberto Ríos, (conductor del campero placas HJE513) estaban ejecutando una actividad peligrosa, que demanda el máximo cuidado y pericia, existiendo una falta de precaución del conductor del vehículo tipo campero, quien en declaración juramentada que cuenta que **lo sucedido ocurrió por la omisión propia de no respetar la señal de pare que existe en el lugar.**

Así mismo existe una clara ausencia de pruebas respecto de las circunstancias en que se presentó el accidente; no existe material probatorio que permita establecer la presunta falla en el servicio que invoca el demandante.

Respecto al elemento del nexo causal, se exige para su configuración que se presente de forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño, colocando especial atención a las circunstancias y hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado con las consecuencias descritas en los hechos de la presente solicitud.

AUSENCIA DE NEXO – TEORIA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA

Se afirma que el daño ocurrió por la existencia de la espesura de árboles, baches y huecos que se encontraban en la vía, lo cual no se corresponde a la realidad, por cuanto como se ha insistido, en las declaraciones juramentadas rendidas ante Notario, se puede establecer que fue el señor Wilson Alberto Ríos, conductor del campero placas HJE513 quien no respetó la señal de pare y atropelló al demandante.

En esa dirección no existe un nexo de causalidad en el presente caso que una el daño con la Entidad Territorial y para el caso es conveniente mencionar la teoría de la causalidad adecuada en la producción del daño, desarrollada por el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sentencia 1993-09281 de 06 de julio de 2005 así:

“Lo contrario, equivaldría a aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada entre nosotros por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y **“la teoría de la causalidad adecuada”**. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder.

A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada *teoría de la causalidad adecuada*, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la *causa jurídica* del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... **aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...**⁸.

Bajo ese norte la Sección Tercera en Sentencias del 11 de febrero de 2009, exp.17145 y del 20 de mayo del mismo año, exp.17405, reiteradas en la sentencia del 28 de julio de 2011, exp.21725, y del 24 de febrero de 2016, exp. 34796, sostuvo sobre la causalidad adecuada:

“El elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que **para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico**. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de **causalidad adecuada**, en la cual

⁸ SENTENCIA 1993-09281 DE 06 DE JULIO DE 2005 CONSEJO DE ESTADO - Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996. pág. 245, 246.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. **De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito**”. (Negrillas fuera del texto)

Conforme lo anterior, para ésta defensa es claro que en la presente causa no existe un nexo de causalidad habida cuenta que los hechos que promueven la presente acción se surtieron de forma distinta a lo planteado en el libelo y los mismos se corresponden a una imprudencia de un tercero que es el señor Wilson Alberto Ríos anteriormente referido.

9. NOTIFICACIONES

Las personales en la secretaría de sus Despacho o en el CAM torre alcaldía piso 9 ubicado en la Avenida 2N No. 10-70 de Santiago de Cali, notificacionesjudiciales@cali.gov.co; jose.sanchez.cel@cali.gov.co.

De su Despecho Atentamente;

JOSÉ DAVID SÁNCHEZ CELADA
C.C. 14.465.601 Cali
T.P. 133.751 Consejo Superior de la Judicatura
Teléfono Celular: 3117553182



SC-CER355037

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9
Teléfono: 6617084-85 www.cali.gov.co